

Aⁿálisis

Signo de los tiempos: el arribo de Michelle Bachelet al Ministerio de Defensa de Chile

DOI: 10.32870/mycp.v5i15.152

Arturo Santa Cruz*

La democracia en Chile se consolida. Doce años han pasado desde que se reinstaurara el régimen pluralista, aquel 11 de marzo de 1990 en que el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, tomó posesión como presidente de la república austral. Atrás quedaban diecisiete años de dictadura militar, la cual había iniciado con el asalto comandado por el general Augusto Pinochet al Palacio de La Moneda para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. En vísperas de la celebración del duodécimo aniversario de la democracia en Chile, el tercer presidente de la Concertación, el socialista Ricardo Lagos, designó a Michelle Bachelet como ministra de Defensa.

El hecho es notable por varias razones. En primer lugar, Bachelet no sólo es la primera mujer chilena en ejercer un cargo que había sido ocupado sólo por hombres en su país, sino en toda América Latina. Así pues, su designación tiene un importante significado en términos de igualdad de género, estableciendo quizás un paralelo con la designación de Madeleine Albright como secretaria de Estado estadounidense en la administración Clinton.

En segundo lugar, la designación de Bachelet es notable por su filiación política: el socialismo. Así, la ex ministra de Salud se convierte en la primer militante socialista en ocupar ese ministerio desde que Orlando

Letelier lo hiciera en 1973. La designación de Bachelet puede entonces interpretarse como la vuelta de un país del Cono Sur a la normalidad democrática en la cual políticos de diversas filiaciones pueden acceder a importantes cargos de gobierno.

Un tercer elemento que hace notable la designación de Bachelet como ministra de defensa es su propia biografía: la flamante ministra no es una advenediza en cuestiones de seguridad. Su padre, Alberto Bachelet, fue general de las fuerzas armadas chilenas, y falleció en prisión luego de ser detenido en el golpe militar de 1973. Pero su relación con el sector castrense no se limita a sus lazos sanguíneos. Bachelet se ha vinculado profesional y políticamente con las fuerzas armadas de su país, sirviendo como asesora de ministros de defensa de los gobiernos de la Concertación, y manteniendo buenas relaciones con los altos mandos castrenses.

Las anteriores peculiaridades de la ministra Bachelet toman relieve si se considera el papel de las fuerzas armadas en la transición democrática chilena. De acuerdo a la constitución pinochetista de 1980, correspondía a las fuerzas armadas jugar un papel “tutelar” de la “democracia protegida” que el gobierno militar pretendía instaurar en Chile. Sin embargo, a raíz de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988 sobre la continuación o no de su gobierno por ocho años más, el régimen militar se vio forzado a negociar algunas

* Investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara.

reformas constitucionales de cara a los comicios presidenciales de 1990. Entre las modificaciones que se hicieron a la carta magna en 1989, destacan dos, relacionadas directamente con el papel de los militares en la vida política chilena. Por una parte, se redujo su influencia al modificarse la integración del Consejo Nacional de Seguridad, haciendo su membresía paritaria con el sector civil, y limitando las funciones del Consejo mismo. Por otra parte, se incrementó el número de integrantes del Senado, el cual, de acuerdo a la constitución, contaba con 34 escaños: 24 para senadores electos y 9 para “institucionales,” cuatro de los cuales son representantes de las fuerzas armadas. La reforma constitucional de 1989 aumentó el número de senadores electos a 38, reduciendo así el peso relativo de los “institucionales.”

Sin embargo, las enmiendas constitucionales no tocaron importantes cotos de poder del sector castrense, el cual siguió jugando un papel central en la vida política chilena en los años 90. Quizá el legado más notable de la transición chilena fue la presencia, por ocho años después de la restauración del régimen pluralista, de Pinochet mismo como comandante en jefe del ejército. Si bien la permanencia del líder golpista pudo haber dotado de estabilidad a la transición, al mantener bajo control al instituto armado, como ha sugerido el ex presidente Aylwin, es un hecho que la relación ejército-autoridades civiles no fue del todo tensa durante la primera década de la transición. Basta mencionar aquí tres incidentes para ilustrar esta afirmación. El primero fue el “ejercicio de enlace” de 1990, en el que el ejército se acuarteló como reacción a diversas acciones que la milicia interpretó como amenazantes para sus intereses. Notablemente, entre éstas se encontraba la investigación, en la Cámara baja, de transacciones comerciales

presuntamente ilícitas del hijo de Pinochet. El segundo incidente tuvo lugar unos meses más tarde, cuando a inicios de 1991 se hizo público el Informe Rettig sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los militares presentaron entonces una airada defensa del régimen militar, enrareciendo el ambiente político de la todavía incipiente democracia.

El tercer incidente que ilustra la tensa relación entre los poderes civil y militar, en la primera década de la transición chilena, es el “boinazo” de 1993. Sintiendo amenazados de nueva cuenta por investigaciones sobre posibles negocios fraudulentos del hijo de Pinochet, los altos mandos castrenses demandaron en esta ocasión una “ley de punto final” que concluyera la revisión judicial a los casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura.

Más allá de estos y otros casos que marcaron las relaciones entre civiles y militares en la primera década de la transición, y más específicamente en los primeros ocho años de ésta, el incidente que vino a cristalizar la compleja relación entre el ejército y las autoridades civiles fue sin duda la detención de Pinochet en Inglaterra en septiembre de 1999. Por cuestión tanto de principios —la soberanía del estado chileno en el ámbito internacional— como de pragmatismo —evitar un enfrentamiento con los militares— los líderes civiles chilenos asumieron la defensa del general retirado ante las cortes inglesas. Así

pues, quienes habían sido víctimas del régimen pinochetista y que ahora se encontraban en posiciones de mando en el estado chileno, súbitamente se convirtieron en aliados poco comunes del sector castrense. Interesantemente, uno de los militares que jugó un papel determinante tanto en el proceso de repatriación de Pinochet como en el de su

**La designación de
Bachelet puede
interpretarse como la
vuelta a la
normalidad
democrática en la
cual políticos de
diversas filiaciones
pueden acceder a
importantes cargos de
gobierno.**

eventual sometimiento a la justicia chilena, el general Juan Emilio Cheyre, acaba de ser nombrado comandante en jefe del ejército. Y es con él precisamente con quien la ministra Bachelet ha forjado una de sus relaciones políticas más sólidas en el ámbito castrense. Las relaciones cívico-militares parecen tener por tanto asegurado un buen futuro —al menos en lo que resta del mandato del presidente Lagos.

Así pues, la llegada de Michelle como ministra de defensa de Chile parece ser un signo de los tiempos. Como ella misma ha comentado al respecto, su designación “es una demostración de que esta es una democracia fuerte (*El Mercurio*, 13 enero 2002).